

**AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1428/2012**  
**QUEJOSO: \*\*\*\*\***

**PONENTE: MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA**  
**SECRETARIO: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA**

**Visto Bueno**  
**Sr. Ministro**

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día **veintiuno de mayo de dos mil catorce**.

**S E N T E N C I A**

**Cotejó:**

Recaída al amparo directo en revisión **1428/2012**, promovido por el quejoso \*\*\*\*\*.

**A N T E C E D E N T E S:**

**I. Hechos que originaron el presente asunto.**

– **Investigación.** Para comprender el inicio del proceso penal incoado contra el quejoso, es útil partir de los diversos informes que durante junio de dos mil ocho rindieron dos agentes

de la Policía Judicial del Distrito Federal —\*\*\*\*\* y \*\*\*\*\*— al encontrarse investigando dos delitos de secuestro calificado.

Los referidos agentes policiacos, mediante colaboración con los familiares de las víctimas, obtuvieron diversos datos sobre los secuestradores con base en el rastreo de llamadas efectuadas con el fin de negociar los rescates y que recibían en las líneas telefónicas de sus domicilios. Con base en estos elementos, el Ministerio Público emitió orden de detención bajo el supuesto de caso urgente con apoyo en el artículo 266 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal<sup>1</sup>, contra un inculpado (\*\*\*\*\*), debido a que tenía registrado a su nombre uno de los números telefónicos obtenidos en la investigación y porque familiares de uno de los afectados sospechaban sobre la intervención de esa persona, además, la orden se emitió para la búsqueda de otros probables responsables, la ubicación de la casa de seguridad, entre otros aspectos<sup>2</sup>.

– **Detención.** El informe de puesta a disposición de veintinueve de octubre de dos mil ocho, suscrito por los policías \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* y \*\*\*\*\*, con el visto bueno del Jefe de Grupo \*\*\*\*\* –ratificado ministerialmente por los tres primeros de ellos—<sup>3</sup>, arroja que se trasladaron a la calle de \*\*\*\*\*, frente a la iglesia del pueblo de \*\*\*\*\* delegación \*\*\*\*\*, donde

---

<sup>1</sup> “**Artículo 266.** El Ministerio Público y la policía judicial a su mando están obligados a detener al responsable, sin esperar a tener orden judicial, en delito flagrante o en caso urgente.”

<sup>2</sup> Esta orden se puede apreciar en las páginas 1412 a 413 del tomo II de la causa penal.

<sup>3</sup> Sus declaraciones se aprecian en las fojas 1454 a 1457 del tomo II y 3749 a 3753 del tomo IV de la causa penal. El motivo por el que no obran en forma consecutiva esas declaraciones aunque fueron recabadas en la misma fecha, es porque se acumularon las dos averiguaciones previas, quedando en esos distintos tomos.

lograron ubicar al inculcado que buscaban, quien fue encontrado en un puesto ambulante y portaba el teléfono celular cuyo número estaba relacionado a las investigaciones.

A continuación, lo aseguraron y entrevistaron en relación con los hechos materia de la indagatoria. De acuerdo con dicho informe, la persona detenida mencionó que su hermano (\*\*\*\*\*) era quien había participado en los dos secuestros investigados.

De este modo, los policías, acompañados del detenido de referencia, procedieron a localizar al hermano de ese sujeto, donde lograron la detención de otras dos personas inculpadas (\*\*\*\*\* y \*\*\*\*\*<sup>4</sup>), el hermano del primer detenido también aceptó haber participado en los hechos y reveló la participación de otras personas, entre ellas, el revisionista \*\*\*\*\*, aduciendo que este último fue quien los contactó para realizar uno de los secuestros y mencionó que trabajaba como repartidor de pan de la empresa \*\*\*\*\*. Por esa razón, los policías realizaron una investigación en el centro de trabajo del quejoso en donde lo aseguraron. En ese momento, hallaron en su poder uno de los teléfonos relacionados con la investigación, de ahí los llevaron a reconocer la casa de seguridad y más tarde los pusieron a disposición de la autoridad ministerial, así como los tres teléfonos celulares que traían los implicados<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Este último detenido también portaba en su poder un teléfono celular cuyo número corresponde a los relacionados con la investigación.

<sup>5</sup> Informe que obra agregado en las fojas 3759 a 3765 del tomo IV de la causa penal.

– **Primera Instancia.** Estos hechos dieron lugar a la instrucción de la causa penal \*\*\*\*\*, seguida en la vía ordinaria en la que agotada la instrucción y posteriormente su cierre, la representación social formuló conclusiones acusatorias, mismas que fueron contestadas por la defensa del acusado y se celebró la audiencia de vista.

El doce de mayo de dos mil diez la Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Penal del Distrito Federal, declaró al quejoso culpable en la comisión de dos delitos de secuestro, previsto y sancionado en los artículos 163 y 164, fracciones III y IV, del Código Penal para el Distrito Federal.

Lo anterior, al tener por probados los siguientes hechos:

a) Que el siete de marzo de dos mil ocho, aproximadamente a las veintidós horas con cuarenta y cinco minutos, \*\*\*\*\* (quejoso) actuando en grupo con otros individuos, privaron de la libertad a \*\*\*\*\* cuando caminaba sobre la calle Niños Héroes, esquina con \*\*\*\*\*, en la colonia \*\*\*\*\*, delegación \*\*\*\*\*, Distrito Federal. En cuanto a la forma de comisión del delito, se tuvo por cierto que los sujetos activos amagaron a la víctima con armas de fuego y lo obligaron a subir a un vehículo, cubriéndole la cabeza y lo trasladaron a una casa de seguridad ubicada en la calle \*\*\*\*\*, manzana \*\*\*\*\*, lote \*\*\*\*\*, en la colonia \*\*\*\*\*, delegación \*\*\*\*\*, de esta ciudad, donde lo mantuvieron en cautiverio vendado de los ojos, atado de pies y manos, hasta el veintidós de ese mismo mes y año, previo el pago de un rescate de \*\*\*\*\* pesos.

b) Que el quince de abril de dos mil ocho, aproximadamente a las seis horas con treinta minutos sobre la calle \*\*\*\*\*, colonia \*\*\*\*\*, delegación \*\*\*\*\*, Distrito Federal, \*\*\*\*\* fue privado de la libertad por el quejoso actuando en grupo con otros sujetos en condiciones semejantes al secuestro antes relatado, llevándolo a la mencionada casa de seguridad en donde lo mantuvieron vendado y sometido, incluso, le amputaron el dedo meñique de la mano izquierda con el propósito de presionar a sus familiares y lo dejaron en libertad el cinco de mayo del mismo año, previo el pago de un rescate por la cantidad de \*\*\*\*\* pesos.

En consecuencia, se impusieron al quejoso las penas de \*\*\*\*\* años, \*\*\*\*\* meses de prisión y multa de \*\*\*\*\* días de salario mínimo, equivalentes a \*\*\*\*\* pesos con \*\*\*\*\* centavos.

– **Segunda Instancia.** Inconforme con esta decisión, el ahora quejoso interpuso recurso de apelación, mismo que fue fallado el veinte de agosto de dos mil diez por la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el **toca \*\*\*\*\***, que decidió modificar la sentencia recurrida pero sólo en cuanto a la determinación del grado de culpabilidad del quejoso, cuestión que impactó en la determinación de sus penas. Concretamente, éstas se redujeron a \*\*\*\*\* **años, \*\*\*\*\* meses de prisión y multa de \*\*\*\*\* días de salario mínimo**, equivalentes a \*\*\*\*\* pesos con \*\*\*\*\* centavos. Esa

variación también comprendió la absolución al quejoso del pago de la reparación del daño y del resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

– **Juicio de amparo.** Por escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil once, \*\*\*\*\*, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la sentencia definitiva de **veinte de agosto de dos mil diez**, emitida en el **toca \*\*\*\*\***, que reclamó de la **Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal**, en la que hizo valer sus respectivos conceptos de violación, en que esencialmente estimó transgredidos en su perjuicios los artículos 14, 16 y 20 Constitucionales.

De ese asunto correspondió conocer al Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, que en sesión de **veintinueve de septiembre de dos mil once**, dictó sentencia en el **amparo directo 191/2011**, en la que resolvió negar la protección constitucional solicitada.

– **Trámite del primer recurso de revisión.** Disconforme con la sentencia dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, el quejoso interpuso recurso de revisión y en auto de catorce de octubre de dos mil once, el Presidente del referido Tribunal ordenó remitir los autos y el escrito de expresión de agravios a este Alto Tribunal.

Recibidos los autos en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, su Presidente, en proveído de veinte de octubre de dos

mil once, registró el recurso con el número de **amparo en revisión \*\*\*\*\*** y determinó que la Primera Sala debía conocer del asunto, por lo que ordenó remitir los autos.

Seguidos los trámites correspondientes, en sesión de **dieciocho de enero de dos mil doce**, la Primera Sala de este Alto Tribunal por unanimidad de cinco votos determinó que el Tribunal Colegiado del conocimiento efectuó una interpretación del derecho humano de toda persona a ser puesta a disposición del Ministerio Público y resolvió el asunto en dos temas esenciales:

**A)** Respecto de la detención como presupuesto del derecho humano interpretado, advirtió que el aludido Tribunal Colegiado de Circuito concluyó que la detención del quejoso ocurrió en flagrancia que esta Primera Sala estableció que no estaba acreditada y efectuó una interpretación constitucional de esa figura jurídica; y

**B)** Efectuó una interpretación del principio de inmediatez en lo concerniente a los términos “sin dilación” y “sin demora”, previstos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 16 constitucional, respecto del régimen de protección contra detenciones en cuanto a que la persona detenida sea puesta a disposición del Ministerio Público lo antes posible.

Asimismo, calificó de **inoperantes** los restantes agravios.

Por consiguiente, revocó la sentencia dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito para el efecto de que dicho órgano de control constitucional dictara otra resolución en la que, partiendo de la interpretación constitucional expuesta en la ejecutoria emitida por este Alto Tribunal, estudiara de nueva cuenta la legalidad de la determinación emitida por la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el veinte de agosto de dos mil diez dentro del **toca \*\*\*\*\***.

En cumplimiento a esa sentencia el **veintiséis de abril de dos mil doce**, el referido Tribunal Colegiado de Circuito emitió una nueva determinación en la que consideró nuevamente infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso y le negó la protección constitucional solicitada.

## **II. Trámite del presente recurso de revisión.**

En desacuerdo con el fallo anterior, el quejoso interpuso recurso de revisión mediante escrito presentado el once de mayo de dos mil doce ante el Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito. Por acuerdo del día dieciocho de los inmediatamente citados mes y año, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo por recibidos los expedientes, admitió el recurso, lo registró con el número **amparo directo en revisión 1428/2012** y ordenó remitir los autos a esta Primera Sala, por tratar de un tema, materia de su especialidad.

El veinticinco de mayo de dos mil doce, el Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Presidente en funciones de la Primera Sala de



la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó el avocamiento en el asunto y designó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como Ministro Ponente del mismo.

Finalmente, en proveído de veinte de febrero de dos mil trece, el Presidente de esta Primera Sala solicitó a la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y al Juzgado Cuadragésimo Séptimo de lo Penal de la misma entidad federativa, los autos que integran el **toca de apelación** \*\*\*\*\*, así como la **causa** \*\*\*\*\*, los cuales se tuvieron por recibidos mediante proveídos de veintidós de febrero y cuatro de marzo de dos mil trece, respectivamente, ordenándose devolver los autos al Ministro Ponente.

### **C O N S I D E R A N D O:**

**PRIMERO. Competencia.** Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V, y 84, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada; 21, fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto Primero, fracción I, del Acuerdo Plenario 5/1999, así como el punto Tercero del Acuerdo Plenario 5/2013, publicados en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente, el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve y el veintidós de mayo de dos mil trece; en virtud de que

se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo en materia penal, especialidad que corresponde a esta Primera Sala.

**SEGUNDO. Oportunidad.** Previo a efectuar el análisis correspondiente, se hace necesario establecer si el recurso de revisión se interpuso de manera oportuna.

En el presente asunto, la sentencia de veintiséis de abril de dos mil doce, pronunciada por los Magistrados integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, se notificó por lista a las partes el **lunes siete de mayo de dos mil doce** (foja 1466 del cuaderno de amparo), surtiendo sus efectos al día hábil siguiente, martes ocho de mayo del mismo año, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley de Amparo y, corriendo el término para su interposición del **miércoles nueve al martes veintidós de mayo de dos mil doce**, excluyéndose los días doce, trece, diecinueve y veinte de ese mes de mayo por ser sábados y domingos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley de Amparo, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 74 de la Ley Federal del Trabajo.

Por tanto, si el recurso de mérito se interpuso el **viernes once de mayo de dos mil doce**, su presentación fue oportuna.

**TERCERO. Cuestiones necesarias para resolver el recurso.**

Analizaremos el contenido de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, enseguida la sentencia dictada por el aludido Tribunal Colegiado de Circuito en cumplimiento a la resolución pronunciada por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el juicio de **amparo directo en revisión \*\*\*\*\*** y, seguidamente, los agravios expuestos por el aquí recurrente.

#### **A) Conceptos de violación.**

Los argumentos que expuso el quejoso en la demanda de amparo, en el aspecto de constitucionalidad, competencia de este Alto Tribunal, en síntesis son los siguientes:

**Primero.** El quejoso señaló que se violó en su perjuicio el artículo 16 de la Constitución Federal, en virtud de que sin fundamento legal alguno la autoridad responsable determinó que, al llevar a cabo el reconocimiento de su voz en la cámara de Gesell, no era necesaria una formalidad específica, pues no fue una diligencia de confrontación o de inspección ministerial y no era indispensable que se asentara fe de ello o que hubiera intervención de un perito.

Aunado a lo anterior, afirmó que existieron diversas diligencias practicadas por el Ministerio Público que son contrarias a derecho pues contienen vicios formales que debieron observarse durante la averiguación previa.

Por otro lado, resaltó que conforme al principio de inmediatez procesal, las primeras declaraciones que rindió son las que merecen mayor crédito, pues por su cercanía con los hechos se consideran generalmente veraces por no haber existido tiempo para que quien las produce reflexione sobre la conveniencia de alterar los hechos.

De todo lo anterior, concluye que todas las diligencias ministeriales deben ser consideradas nulas de pleno derecho, máxime que no debe considerarse a la prueba circunstancial como el medio que permita aglutinar pruebas deficientes o imperfectas.

**Segundo.** Consideró que las conversaciones telefónicas que fueron grabadas por la policía judicial relacionadas con los acusados, sin que previamente se contara con una orden judicial para ello, son pruebas ilícitas que carecen de todo valor probatorio, aunado a que no se determinó pericialmente que las voces efectivamente pertenecieran al quejoso.

Expresó que la intervención de los medios de comunicación privada está permitida como una estrategia para combatir el crimen organizado, por lo que únicamente la autoridad judicial federal puede autorizar su intervención, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la autoridad federativa correspondiente. Consecuentemente, dichas pruebas tuvieron que haber sido declaradas nulas por la autoridad responsable, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, apartado A, fracción IX de la Carta Magna.

En este mismo sentido, señaló que por falta de orden judicial previa, debió declararse nulo el informe rendido por el técnico policial de investigación cibernética, el cual revisó los teléfonos celulares que les fueron asegurados a los acusados, para saber el contenido exacto de las llamadas recibidas, llamadas perdidas, llamadas realizadas, mensajes de salida y entrada, directorio telefónico, así como archivos de imagen y sonido. Aunado a que el citado policía no era agente federal, por lo que se encontraba impedido para intervenir teléfonos celulares.

Por otro lado, indicó que si en la época en la que la autoridad responsable emitió la resolución impugnada, aún no existía disposición expresa que facultara al Ministerio Público Federal a solicitar a empresas de telecomunicaciones información sobre números telefónicos sin una orden judicial para ello, el Ministerio Público del fuero común que integró la averiguación previa no estaba facultado para solicitar información a dichas empresas sin control judicial previo, por lo que se violó en su perjuicio el artículo 16 Constitucional, pues del precepto 20, apartado A, fracción IX, se desprende que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales debe ser considerada nula.

**Tercero.** El quejoso manifestó que los policías judiciales que lo detuvieron, lo retuvieron por un lapso de once horas, más tiempo del que resultaba racionalmente necesario, en atención a las circunstancias propias de distancia y disponibilidad de

traslado, por lo que resulta inconcuso que dicha detención prolongada genera presunción fundada de que se le tuvo incomunicado y sufrió afectación psíquica y, por ende, sus confesiones respecto de los hechos que se le imputan carecen de validez, ello en atención al cuarto párrafo, del artículo 16 Constitucional.

**Cuarto.** Indicó que se violaron en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al no haber dejado constatado que las pruebas de la averiguación previa se contraponen entre sí.

**Quinto.** Finalmente, señaló que se violó en su perjuicio el artículo 16 Constitucional, toda vez que los informes de las empresas de telecomunicaciones fueron recabados sin control judicial, por lo que la autoridad responsable no contaba con indicios suficientes para demostrar que el quejoso efectivamente fue el autor de los delitos que se le imputan.

**B) Sentencia dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal del Primer Circuito.**

Las consideraciones expresadas por el mencionado Tribunal Colegiado de Circuito en cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Alto Tribunal, fueron las siguientes:

- De la resolución de dieciocho de enero de dos mil doce, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que interpretó los términos “flagrancia”, “sin dilación”

y “sin demora”, previstos en el artículo 16 Constitucional se desprende la obligación de este Tribunal Colegiado de estudiar de nueva cuenta –en base a dicha interpretación– la sentencia dictada por la sala responsable.

- De las constancias que conforman la causa penal, se advierte que por el tiempo en que fue asegurado el quejoso, el veintinueve de octubre de dos mil ocho y la fecha del último secuestro fue en el mes de abril, evidentemente no se detuvo en flagrancia; por tal circunstancia, **descartó el estudio de la figura de la flagrancia en esa sentencia, puesto que la cuestión del aseguramiento y detención fue diversa.**

- De la revisión de autos se desprende que el aseguramiento y presentación ante el Ministerio Público, fue el veintinueve de octubre de dos mil ocho, aproximadamente a las dieciocho horas, originada por la denuncia formulada por \*\*\*\*\* y fue puesto a disposición del Ministerio Público a las veintitrés horas del día veintinueve de octubre del mismo año y retenido a partir de las cuatro horas con diez minutos del treinta de octubre del dos mil ocho, **por caso urgente.**

- Lo anterior, debido a que a partir de la detención de uno de los inculpados, éste refirió que en los secuestros también participaron otras personas, entre ellos, \*\*\*\*\* . Razón por la cual, el aseguramiento y presentación del peticionario de amparo se encuentra justificado y apegado a leyes previamente establecidas, esto es, a lo preceptuado en los artículos 3 y 266

del Código de Procedimientos Penales, 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y 6 del Reglamento de la citada Ley Orgánica, todas del Distrito Federal, como los exige la Constitución Federal (artículo 16 y 21) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7).

- En el supuesto de que los agentes presentadores no hubieran realizado el aseguramiento del quejoso esperándolo en su lugar de trabajo –proporcionado por uno de los detenidos– a efecto de presentarlo ante el Ministerio Público, éste se hubiera sustraído de la acción de la justicia.

- Asimismo, **tampoco existió demora injustificada a partir de que fue asegurado el quejoso hasta que fue presentado a disposición del Ministerio Público**, puesto que \*\*\*\*\* fue detenido después de las dieciocho horas y presentado ante el órgano investigador a las veintitrés horas. El lapso entre ambos momentos se encuentra justificada debido a que el aseguramiento se realizó en la avenida \*\*\*\*\*, esquina con \*\*\*\*\*, colonia \*\*\*\*\*, delegación \*\*\*\*\*, posteriormente, los agentes policiacos tuvieron que trasladarse a la casa de seguridad ubicada en calle \*\*\*\*\*, lote \*\*\*\*\*, manzana \*\*\*\*\*, colonia \*\*\*\*\*, delegación \*\*\*\*\*, a fin de continuar con la investigación, para finalmente ponerlo a disposición del Ministerio Público en calle \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, esquina con \*\*\*\*\*, colonia \*\*\*\*\*, delegación \*\*\*\*\*.



- Tomando en consideración las distancias y el tránsito existente en la Ciudad de México, Distrito Federal, no existió demora injustificada en la puesta a disposición de \*\*\*\*\*.

- Al momento de rendir su declaración ministerial confesó haber realizado los hechos delictivos que se le imputaban para posteriormente, al rendir su declaración preparatoria, asegurar que fue torturado por los agentes policiacos que lo detuvieron.

- Cuestiones que al haberse suscitado durante la averiguación previa, no pueden ser analizadas en el presente juicio de amparo en virtud de haber operado un cambio en la situación jurídica del quejoso con el dictado del auto de formal prisión.

- De ahí, que la constitucionalidad de la detención determinada por el Ministerio Público en caso urgente y su ratificación, se consumó, por lo que no puede adoptarse otro criterio sin afectar el auto de formal prisión y sin causar perjuicio a la sentencia dictada en el procedimiento.

- Adujo que el quejoso carece de razón al considerar que se debió haber solicitado la presencia de un perito que corroborara su voz con la que obraba en las grabaciones. Ello no era necesario toda vez que los ofendidos lo habían reconocido expresamente y que, en todo caso, el quejoso fue quien debió ofrecer esa prueba.

- También señaló que resulta infundado el argumento del quejoso en el sentido de que se violaban las formalidades del procedimiento por el hecho de que dentro de las ampliaciones de declaración ministerial de los agraviados y los testigos, se hubiere realizado el reconocimiento de voz sin que al calce de las audiencias constaran las firmas del representante social, oficial secretario, policías judiciales, quejoso y demás personas que intervinieron en ellas, todo esto, bajo el argumento de que tal omisión no es suficiente para sostener que se hubieran violado las formalidades del procedimiento, ya que las diligencias que en la averiguación previa desahogó el Representante Social son continuas; además, que el hecho de que en cada una de ellas no se encuentre su rúbrica, no implica que carezcan de eficacia probatoria, ya que al cierre de las actuaciones obra la firma tanto del Ministerio Público como de su oficial secretario.

- Por otra parte, calificó de infundado el argumento del quejoso en el sentido de que la grabación de las negociaciones por comunicaciones telefónicas constituía una prueba ilícita, porque la intervención de los medios de comunicación privada únicamente está permitida como estrategia para combatir el crimen organizado y sólo la autoridad judicial federal puede autorizar la intervención.

Lo anterior, debido a que las conversaciones telefónicas que fueron grabadas por elementos de la policía judicial no son pruebas ilícitas en virtud de que una prueba ilícita es aquella en la que su obtención implica la vulneración de derechos fundamentales, cuestión que en el caso no se actualizó, pues aun

cuando la revisión de los autos de la causa penal permite concluir que, efectivamente, no existió orden judicial para grabar las llamadas telefónicas, ello de ninguna forma vulnera garantías individuales del quejoso, ya que el origen de las cintas de grabación derivan del mandato que, en términos del artículo 21 constitucional, realiza el Ministerio Público que previno del secuestro; esto, aunado al consentimiento de los ofendidos, particularmente el padre de la víctima. No debe perderse de vista que, en virtud de la naturaleza del delito de secuestro y con el fin de salvaguardar la vida del secuestrado, resulta primordial que la autoridad ministerial y policíaca se avoquen de inmediato al esclarecimiento de los hechos, al encontrarse en peligro el bien jurídico máspreciado por el ser humano que lo es la vida.

- Destacó que es infundado el argumento en el cual el quejoso señaló que no debía otorgarse valor probatorio al informe técnico policial de investigación cibernética suscrito por el agente de la policía judicial \*\*\*\*\* (del cual se advertía la utilización de un software para intervenir los teléfonos celulares asegurados a todos los inculcados, con el fin de saber el contenido de las llamadas recibidas, perdidas, realizadas, mensajes de salida y entrada).

Tal calificación tuvo como sustento el que el referido medio probatorio comprobó que los sentenciados sostenían diversas comunicaciones entre ellos, pues dentro de las agendas telefónicas existían los números de celulares de cada uno de ellos, por lo que dicho informe no puede tildarse de nulo, aunado

a que no existió ninguna intervención de comunicación privada, pues el análisis de los aparatos telefónicos lo realizó el especialista después de que fueron detenidos los inculcados, mismo que rindió su dictamen a petición de la Representación Social, para el efecto de que sirviera de un medio de convicción más dirigido a robustecer la participación de inculcados.

- En cuanto a los alegatos del quejoso dirigidos a combatir la validez de los informes expedidos por las empresas de \*\*\*\*\* (\*\*\*\*\*), y \*\*\*\*\*, el Tribunal Colegiado también los calificó como infundados. Al respecto, consideró que no resultaba necesario que la solicitud de los informes debía estar precedida por una intervención judicial por parte de un Juez Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones Privadas, ya que, en primer lugar, en la época en que ocurrieron los hechos (marzo y abril de dos mil ocho), no existía la denominación de esos juzgados y, en segundo, porque tales actos no constituían una intervención telefónica en la que tuviera que mediar la aprobación judicial. Únicamente se trató de un informe que, a solicitud del Ministerio Público y en términos del artículo 21 constitucional, fue requerido para la obtención de los números telefónicos, desde donde fueron realizadas las llamadas con las que el aquí quejoso solicitaba y presionaba a los familiares de las víctimas para la obtención del rescate.

- De igual manera, el quejoso consideró que desde el dieciocho de junio de dos mil ocho existían jueces que resolverían de forma inmediata las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación y que eso

debía ser conocido por la autoridad responsable. Lo anterior, ya que tal cuestionamiento no puede aplicarse a favor del quejoso, pues los hechos ocurrieron el siete de marzo y quince de abril de dos mil ocho, y a partir de esas fechas la autoridad ministerial intervino y solicitó los informes a las empresas de telefonía, apoyándose principalmente en los artículos 14, 16, 17 y 21 constitucionales vigentes en esas fechas; es decir, antes de las reformas a la Constitución que señala, por lo que precisó que no existió ningún perjuicio contra el peticionario de amparo.

- Respecto a lo anterior, se concluyó que no existe violación al derecho de confidencialidad por el hecho de que obren en autos los informes de \*\*\*\*\*, ya que dichos informes no detallan el contenido de todas las llamadas, sino únicamente el número telefónico al que se marcó, por lo que son supuestos distintos que no perjudican la esfera jurídica.

- En otro tema, se señala que no asiste razón al quejoso cuando afirma que tanto la inspección ministerial como el dictamen en materia de criminalística de campo de treinta de octubre de dos mil ocho, debieron declararse nulas. Lo anterior, en virtud de que dicho dictamen demostró la existencia de la casa de seguridad en la que mantuvieron privados de la libertad a los ofendidos. Además, tanto la inspección ministerial como el dictamen ya referidos, de ninguna forma tuvieron que estar precedidas de una orden judicial como lo pretendió el quejoso. Esas diligencias fueron desarrolladas por la representación social y por peritos dentro de la averiguación previa y en modo alguno

se está en el supuesto de que se haya violentado la inviolabilidad del domicilio al ser un caso completamente distinto a la orden de cateo, en virtud de que incluso como el propio dictamen señaló, el inmueble fue abierto por vecinos que habitan los cuartos, por lo que no se está en el supuesto previsto en el artículo 152 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

- De igual forma, que contrario a lo que pretendía el quejoso, resultaba legalmente correcto que la sala responsable otorgara valor jurídico a los informes de veintidós de abril de dos mil ocho, presentados por los agentes de la policía judicial del Distrito Federal (\*\*\*\*\* y \*\*\*\*\*) ante el Ministerio Público, en el cual informaron que intervinieron la conversación telefónica para la negociación del secuestro de \*. No es acertado declarar su invalidez porque existió consentimiento de los familiares de las víctimas, para así lograr el esclarecimiento de los secuestros, por lo que fue correcta la adminiculación que realizó la responsable de las grabaciones y la fe ministerial con todo el caudal probatorio que obra en autos.

- También, que la autoridad ordenadora tuvo adecuadamente demostrada la calificativa prevista en el artículo 164, fracción IV del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal —que el delito se realice con violencia—. Por ello, adujo, el representante social fundada y motivadamente acusó al quejoso.

- En cuanto a la responsabilidad penal del amparista, se tuvo acreditada su participación como coautor material en dos

delitos de secuestro calificado y consideró ajustado al principio de legalidad el proceder de la responsable en cuanto al grado de culpabilidad que fijó al quejoso y las sanciones impuestas, así como los demás aspectos relacionados con ese apartado de la sentencia.

Por lo que nuevamente negó el amparo solicitado.

**C) Agravios.** El recurrente hizo valer los siguientes agravios:

1. El Tribunal Colegiado realizó una interpretación directa del artículo 16 Constitucional al exponer que la demora en la puesta a disposición del inculpado quedo justificada pues en el precepto constitucional en cita, no se establece que una persona pueda ser detenida por más tiempo del que establezca necesario. Proceder con el que además se incumplió con lo establecido en la sentencia emitida con anterioridad por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión \*\*\*\*\*.

2. Por otra parte, contrario a lo sostenido por el Tribunal Colegiado del conocimiento, la policía no puede retener a una persona sin informarlo (presentarlo) a la autoridad ministerial para obtener su confesión o información relacionadas con la investigación que se realiza. En este sentido, una detención en caso urgente no es aquella que se realiza con fundamento en el señalamiento de un cómplice, pues en este caso se tenía que

informar a la autoridad ministerial a efecto de que esta solicite a la autoridad judicial que libre una orden de aprehensión.

Además, previo a emitir las consideraciones expuestas, el Órgano de control constitucional debió resolver, por una parte si la detención por caso urgente debe ser emitida por el Ministerio Público previo a la detención del quejoso, y por la otra, tenía que haber determinado las consecuencias que derivan de una detención ilegal.

3. Lo antes expuesto, con independencia del argumento del Colegiado consistente en que el amparo contra la ratificación de la detención es improcedente por cambio de situación jurídica, cuando con posterioridad se dicta auto de formal prisión. Al caso es aplicable las tesis de rubro: ***“AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO”*** y ***“AMPARO DIRECTO. PROCEDE QUE EN ÉL SE ANALICEN COMO VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LAS COMETIDAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, CUANDO AFECTEN LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO.”***

En ese mismo sentido, el punto 6 del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que toda persona que se viere amenazada de ser privada de su



libertad, tiene derecho a recurrir dicha determinación ante juez o tribunal competente.

4. Finalmente, la confesión del quejoso carece de valor probatorio al haber sido obtenida sin que mediara una orden por escrito realizada por el Ministerio Público.

#### **CUARTO. Procedencia del recurso.**

Por ser una cuestión preferente, esta Primera Sala estudiará la procedencia del presente recurso de revisión, para lo cual es necesario tener en cuenta el siguiente entramado normativo.

Conforme a lo previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero y segundo del Acuerdo General Plenario 5/1999, se deriva lo siguiente:

**a)** Que en principio, las sentencias que dicten los Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo directo no admiten recurso alguno.

**b)** Por excepción, tales sentencias pueden ser recurridas en revisión, a condición de que decidan o se hubieran omitido decidir temas propiamente constitucionales, entendiendo por éstos:

**I.** La inconstitucionalidad de una norma, y/o

**II.** La interpretación directa de preceptos de la Constitución Federal.

**c)** Que para efectos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo, además de que en la sentencia recurrida se decidan o se hubieran omitido decidir temas propiamente constitucionales, deberán quedar satisfechos los requisitos de importancia y trascendencia a que hace alusión el artículo 107, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el punto primero del Acuerdo General Plenario 5/1999. Este acuerdo señala que, por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando:

**II.** Exista jurisprudencia sobre el problema de constitucionalidad hecho valer en la demanda de amparo;

**III.** Cuando no se hubieran expresado agravios o, en su caso, éstos resulten ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes y no hubiera que suplir la deficiencia de la queja, o en casos análogos.

**d)** El análisis definitivo de la procedencia del recurso es competencia, según sea el caso, del Pleno o las Salas de esta Suprema Corte. El hecho de que el Presidente, del Pleno o de la Sala respectiva, lo haya admitido corresponde con un examen preliminar del asunto que no causa estado.

Pues bien, del análisis de la sentencia recurrida se aprecia que la misma fue emitida en acatamiento a la resolución dictada por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dieciocho de enero de dos mil doce, en el **amparo directo en revisión \*\*\*\*\***, en la cual ordenó devolver los autos al Tribunal Colegiado, para que después de analizar la interpretación efectuada por este Alto Tribunal del término “flagrancia”, que consideró que no se actualizaba en este asunto, así como los relativos a “sin dilación” y “sin demora”, previstos en el artículo 16 Constitucional, se avocara de nueva cuenta al estudio de legalidad de la sentencia dictada por la Sala responsable.

Por lo tanto, para efecto de su cumplimiento, el Tribunal Colegiado de Circuito estaba obligado a determinar que en el aseguramiento del quejoso no existió la figura de la flagrancia, por lo que debía dilucidar si existió o no una razón jurídicamente válida para detenerlo, esto es, verificar si las condiciones en las que el quejoso fue detenido guardaban correspondencia con la figura del “caso urgente” y, enseguida, analizar bajo los parámetros establecidos por esta Primera Sala, si el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público con exceso o no del tiempo debido, pues fue bajo dicha óptica de análisis de interpretación constitucional que esta Primera Sala determinó el sentido y alcance de los términos “sin dilación” y “sin demora”, previstos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo los cuales deberían efectuarse los tópicos de legalidad.

Así, el Tribunal Colegiado en acatamiento a la determinación de este Alto Tribunal se tuvo que pronunciar de nueva cuenta sobre si existía o no una razón jurídicamente válida para el aseguramiento del quejoso y si fue puesto a disposición del Ministerio Público con exceso o no del tiempo debido.

Con ese propósito, el Tribunal Colegiado, al indicar que no se actualizaba la figura de la flagrancia en la detención, sino el supuesto de caso urgente, estableció los requisitos que a su juicio deben satisfacerse para considerar dicha detención constitucionalmente válida, también determinó que acorde a los lineamientos dados por esta Primera Sala, la demora en la puesta a disposición ante el Ministerio Público estaba justificada, proceder por el que a juicio del recurrente, el mencionado órgano de amparo, al emitir la sentencia recurrida pasó por alto las directrices establecidas por esta Primera Sala en la resolución que recayó al **amparo directo en revisión \*\*\*\*\***, en relación a que por regla general, las detenciones deben estar precedidas por una orden de aprehensión y que los casos de flagrancia y urgencia son excepcionales, sin que en este asunto, el supuesto del caso urgente se actualizara.

De lo anterior, se advierte que en el presente recurso se plantean agravios relativos a la omisión del Tribunal Colegiado de Circuito de tomar en cuenta los parámetros fijados por esta Suprema Corte en su ejecutoria anterior, en relación con la interpretación constitucional hecha, lo que constituye aspectos propiamente constitucionales.

Cierto, pues al resolver el amparo directo en revisión \*\*\*\*\*, aprobado por unanimidad en sesión de doce de junio de dos mil trece, se determinó que las interpretaciones constitucionales que realiza esta Suprema Corte tienen fuerza vinculante y por tanto deben acatarse, por lo que, cuando en una sentencia se fija el sentido y alcance de un derecho constitucional y se ordena que a la luz de dicha determinación se realice un nuevo estudio del asunto presentado por el quejoso, surge como consecuencia necesaria y directa, la obligación de que el Tribunal Colegiado fundamente y motive su nueva resolución a partir de los lineamientos señalados por este Alto Tribunal.

De la discusión de esa sentencia, derivó la tesis 1a. CCXXXIX/2013<sup>6</sup>, del siguiente contenido:

**“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CUANDO SE ADUCE QUE UN TRIBUNAL COLEGIADO NO ATENDIÓ LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN TORNO A LA INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES INVOLUCRADOS EN UN CASO CONCRETO.** A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si en un recurso de revisión en amparo directo, se plantean agravios relativos a la omisión de un tribunal colegiado de tomar en cuenta los

---

<sup>6</sup> Visible en la página 745 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII. Agosto de 2013, Tomo 1. Materia Común. Décima Época. Registro 2004319.

parámetros fijados por este alto tribunal para que dicho órgano jurisdiccional realice una interpretación constitucional de ciertos derechos fundamentales, ello acarrea un aspecto propiamente constitucional. En efecto, las interpretaciones constitucionales que realiza esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen fuerza vinculante y por tanto deben acatarse, por lo que cuando en una sentencia se fija el sentido y alcance de un derecho fundamental y se ordena que a la luz de dicha determinación se realice un nuevo estudio de la demanda de amparo directo presentada por el quejoso, surge como consecuencia necesaria y directa, la obligación de que el tribunal colegiado fundamente y motive su nueva resolución a partir de los lineamientos señalados por este alto tribunal. En consecuencia, cuando en un recurso de revisión se aduce que el tribunal colegiado no atendió los principios establecidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la interpretación de los derechos fundamentales involucrados en el caso en concreto, el mismo debe declararse procedente, en tanto subsiste un problema de constitucionalidad, pues de lo contrario, el cumplimiento de las sentencias de este alto tribunal estaría condicionado a lo resuelto por un órgano jurisdiccional jerárquicamente inferior, dejando al recurrente en un estado de indefensión.”

De tal manera que, si en el caso en concreto, el recurrente aduce que el Tribunal Colegiado del conocimiento no atendió los elementos que esta Primera Sala consideró que deben ser

tomados en cuenta por el juzgador a fin de determinar una dilación indebida en la puesta a disposición, ello implica que el recurso de revisión es procedente, en tanto esta Primera Sala deberá analizar los problemas de constitucionalidad que subsisten, consistentes en si el *a quo* efectivamente resolvió el presente asunto a la luz de la interpretación constitucional establecida en el **amparo directo en revisión \*\*\*\*\***, pues de lo contrario, el cumplimiento de las sentencias de este Alto Tribunal estaría condicionado a lo resuelto por un órgano jurisdiccional jerárquicamente inferior, dejando al recurrente en un estado de indefensión.

#### **QUINTO. Estudio del asunto.**

Son **fundados** los agravios que expone el recurrente, aunque para ello sea menester suplir su deficiencia en términos de lo dispuesto por el arábigo 76 bis, fracción II, de la Ley de amparo, pues esta Primera Sala advierte que:

(I) La interpretación realizada por el Tribunal Colegiado para considerar que la detención del quejoso se dio en atención a un caso urgente, no se ajusta a aquella que correctamente debe hacerse de las disposiciones constitucionales y legales que la rigen; y,

(II) Las razones expuestas por el Tribunal Colegiado de Circuito, para considerar que fue justificada la dilación en la puesta a disposición ante el Ministerio Público, no son acordes a

los lineamientos establecidos por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución emitida en el **amparo directo en revisión \*\*\*\*\***.

Lo anterior es así, porque es indudable que el pronunciamiento sobre la detención realizada al quejoso implica una interpretación constitucional de la figura jurídica de una detención por caso urgente y, a su vez, constituyó un presupuesto para el análisis posterior sobre si existió o no una prolongación indebida en la puesta a disposición del quejoso, todo lo cual formó parte de la ejecutoria de este Alto Tribunal emitida anteriormente en el asunto.

Por ello, partiremos el estudio de este recurso de revisión en esos dos segmentos, del siguiente modo:

#### **I. Consideraciones jurídicas del caso urgente.**

Los numerales 14, párrafo segundo, y 16, párrafos primero, cuarto, quinto, sexto y séptimo Constitucionales, y 268, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, establecen:

#### **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.**

*"Artículo 14. [...]*

*Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del*



*procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.*

*[...]"*

*"16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento*

*[...]*

*En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.*

*Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.*

*En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.*

*Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponerse a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en*

*aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.*

*[...]"*

**Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal:**

*"Artículo 268. Habrá caso urgente cuando concurren las siguientes circunstancias:*

- I. Se trate de delito grave así calificado por la ley;*
- II. Exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, y*
- III. El Ministerio Público no pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar u otras circunstancias.*

*Existirá el riesgo fundado a que se refiere la fracción II anterior, en atención a las circunstancias personales del inculcado, a sus antecedentes penales, a sus posibilidades de ocultarse, a ser sorprendido al tratar de abandonar el ámbito territorial de jurisdicción de la autoridad que estuviera conociendo del hecho o, en general, a cualquier indicio que haga presumir fundadamente que puede sustraerse de la acción de la justicia.*

*El Ministerio Público ordenará la detención en caso urgente, por escrito, fundando y expresando los indicios que acrediten los requisitos mencionados en las fracciones anteriores.*

*Salvo que el individuo se encuentre en presencia del Ministerio Público, las demás detenciones serán ejecutadas por la Policía Judicial, la que deberá sin dilación alguna poner al detenido a disposición del Ministerio Público [...]*”

En torno a la libertad de las personas como derecho fundamental, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela y ordena que en su carácter de pena pública nadie puede ser privado de ella, sino mediante juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. A la par de ello, nuestro sistema constitucional establece que nadie puede ser detenido arbitrariamente, prohibición con rango de derecho fundamental acorde y consistente al sentido de lo dispuesto por el diverso numeral 1, párrafos cuarto y quinto, Constitucional, a partir del cual se establece que la libertad es valor fundamental vinculado a la dignidad humana como condición y base de todos los demás derechos humanos. Por tanto, la protección a la libertad de la persona –en el ámbito penal– rechaza cualquier modelo de Estado autoritario que permita proscribir ideologías o forzar modelos de excelencia humana a través de uso del poder punitivo.

Es así que acorde con el artículo 16, párrafos quinto y sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente se autoriza a detener en flagrancia delictiva o en caso urgente.

Además, de manera vinculante al sistema jurídico nacional, en los instrumentos de carácter internacional en los que el Estado mexicano es parte, la libertad personal es reconocida como derecho humano, lo que implica su amplio respeto, tutela y protección como derecho esencial que desde luego no nace por el hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tiene como fundamento los atributos inherentes a toda la persona humana, y en mayor medida, al estar sujeto a un procedimiento de carácter penal debe garantizarse su salvaguarda irrestricta.

Ello se complementa con los lineamientos de la norma adjetiva interna, donde se establece que fuera de los casos en que exista orden de aprehensión dictada por autoridad judicial competente, el ministerio público se encuentra facultado para avalar la detención de una persona o para autorizar el privarla provisionalmente de su libertad, únicamente en los casos siguientes:

**(a) Flagrancia delictiva.** Cuando le es puesta a disposición al Ministerio Público investigador a una persona detenida en flagrancia delictiva. Término que proviene del latinismo *flagrantie* o *flagrantiae*, cuyo significado literal es arder, brillar o resplandecer, y que metafóricamente ha pasado al ámbito jurídico penal, aplicado al delito, con el significado de delito resplandeciente, esto es, salir a la luz de manera sorpresiva un hecho delictuoso en el momento mismo en que su autor lo comete.

A este respecto el artículo 267 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal –aplicado en el presente asunto– establece tres casos en los que debe considerarse la figura de la flagrancia delictiva, clasificación que atiende al grado de alejamiento de la conducta delictuosa e incluye:

**a)** Cuando el inculpado es detenido en el momento de cometer el delito; lo que constituye la flagrancia estricta, pues en realidad es el único caso en que se surte a cabalidad el acto de sorprender a una persona mientras comete el ilícito;

**b)** Cuando inmediatamente después de ejecutado, el inculpado es perseguido materialmente hasta su detención; lo que doctrinalmente se ha considerado como “cuasiflagrancia” o “casi flagrancia”, ya que no se logra detener al activo en el momento mismo en que consuma el ilícito sino con posterioridad, al ser perseguido de manera ininterrumpida hasta lograr su captura; y,

**c)** Cuando es señalado responsable por la víctima o algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere participado con él en su comisión, o se encuentre en su poder el objeto, instrumento o producto del delito, o bien aparezcan huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su participación en el delito; siempre y cuando se trate de un ilícito grave así calificado por la ley, no haya transcurrido un plazo de setenta y dos horas desde el momento de la comisión del evento, se haya iniciado la

averiguación previa respectiva y no se hubiere interrumpido la persecución del delito.

Esta hipótesis, no obstante se aleja de lo que constituye el acto de sorprender al autor en el momento de su ejecución, se ha considerado legalmente como equiparación a flagrancia, también llamada doctrinalmente presunción de flagrancia, dado que son diversos los indicios que conllevan a presumir, con escaso margen de error, sobre la probable autoría o intervención del sujeto imputado en la comisión del ilícito. Empero, por no haber sido detenido justo al cometer el hecho delictivo la legislación adjetiva condiciona este caso de equiparación a flagrancia, a aquellos vinculados con la comisión de delitos considerados graves, exista averiguación previa por esos hechos, además de inmediatez respecto a su ejecución no mayor a setenta y dos horas, amén de que no se hubiere interrumpido la persecución del ilícito.

Para los enunciados casos considerados legalmente como flagrancia, el párrafo quinto del precepto 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que cometa un delito o inmediatamente después de haberlo cometido y ponerlo sin demora a disposición de la autoridad más cercana, y ésta con la misma prontitud a la del ministerio público.

De ahí que corresponda al órgano ministerial verificar si las circunstancias de la detención se adecuan a las referidas hipótesis consideradas como flagrancia por la ley, debiendo

satisfacerse los requisitos de procedibilidad y si el delito merece pena privativa de libertad decretará la retención del indiciado, o de lo contrario, ante la falta de cumplimiento de cualquiera de esos requerimientos, ordenará la libertad del detenido.

**(b) Caso urgente.** Esta hipótesis de excepción a la regla general atinente a privar provisionalmente de la libertad a un inculpado ante la inexistencia de orden de aprehensión emitida por autoridad judicial competente, tiene lugar y encuentra justificación cuando el Ministerio Público no obstante la no configuración de alguna de las hipótesis de la flagrancia delictiva, cuenta con elementos para establecer que la persona probablemente intervino en un delito por lo que de no proceder inmediatamente a su detención, éste se sustraiga de la acción de la justicia.

Empero, dado el riesgo de argumentar la existencia de caso urgente y se caiga en excesos en la detención de personas, los códigos adjetivos en materia penal, establecen los requisitos tanto formales como materiales para detener o retener al inculpado, bajo la hipótesis de caso urgente, verbigracia, el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, aplicable en el caso concreto, establece:

**a)** Que tal detención la ordene por escrito en la que se funde y exprese los indicios en que se apoye;

**b)** Que el ilícito atribuido sea de los señalados como graves por la ley;

**c)** Exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia; y,

**d)** Por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia no pueda ocurrir ante la autoridad judicial para solicitar la orden de aprehensión.

Requisitos de los que se infiere que la detención por caso urgente puede tener lugar, según el avance de la averiguación previa, cuando no obstante no se encuentra plenamente integrada la indagatoria, existen indicios suficientes de la intervención del inculpado en delito grave, caso en el cual es precisamente la detención del inculpado la que dará la pauta a evitar que éste se sustraiga de la acción de la justicia en tanto se desahogan las diligencias que permitirán sustentar el ejercicio de la acción penal en su contra; esto es, la propia falta de integración del expediente resulta la circunstancia que en términos de lo precisado en el inciso **d)**, impide al representante social acudir ante la autoridad judicial para solicitar la orden de captura; empero, también cabe la posibilidad de que integrada la indagatoria resulte necesario emitir la orden de detención por caso urgente, como acontece por el hecho de que la autoridad judicial contará con seis días para librar la orden de aprehensión, conforme lo establecido por el artículo 286 bis, último párrafo, del citado ordenamiento legal, lapso que pudiera aprovechar el indiciado para evadirse de la acción de la justicia, a menos que la consignación fuere con detenido.



Sin embargo, tanto en los casos de flagrancia, como por caso urgente, la privación de la libertad ante la autoridad ministerial únicamente resultará legal por el plazo de cuarenta y ocho horas, que puede ser duplicado en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada, transcurrido el cual deberá ordenar la libertad del indiciado o ponerlo a disposición de la autoridad judicial.

Es en este último caso, cuando el juzgador al recibir la consignación con detenido se encuentra obligado de manera prioritaria a analizar de manera inmediata las constancias de la indagatoria a fin de establecer si en el caso acontece alguna de las hipótesis previstas para la flagrancia o fueron satisfechos los requisitos para que el ministerio público ordenara la detención o retención del inculpado por caso urgente; lo que resulta lógico pues por ser en ambos casos tal privación de libertad una medida cautelar de naturaleza metaprocesal, dado que se inició con anterioridad al proceso, debe ser convalidada por la autoridad judicial, esto es, por disposición constitucional y legal expresa, al caso de los dispositivos 16, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el caso del Distrito Federal –artículo 286 bis, párrafo tercero, del código adjetivo de la materia– de manera indefectible e insoslayable habrá de calificar la legalidad de la detención, bien para ratificarla o para decretar la libertad del inculpado con las reservas de ley, ante el caso de no satisfacerse las exigencias legales que le dieron origen.

Puntualizado lo anterior, debe indicarse que se atribuye al quejoso, en su calidad de coautor, la comisión de los delitos de secuestro calificado (diversos dos), suscitados el **siete de marzo de dos mil ocho**, en agravio de \*\*\*\*\* y el **quince de abril del mismo año**, en perjuicio de \*\*\*\*\*.

Ahora bien, el Tribunal Colegiado de Circuito, **en cumplimiento a la sentencia emitida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, en el amparo directo en revisión \*\*\*\*\*, indicó que de las constancias que conforman la causa penal, se advertía que por el tiempo en que fue asegurado el quejoso, el veintinueve de octubre de dos mil ocho, y la fecha del último secuestro fue en el mes de abril evidentemente no se le detuvo en flagrancia, toda vez que su aseguramiento no se dio en el momento de cometer los delitos o inmediatamente después de haberlos cometido; por tal circunstancia, la flagrancia no sería motivo de análisis, pues la cuestión del aseguramiento y detención fue diversa.

Así, continuó argumentando el citado órgano de control constitucional, que de la revisión de autos se ponía en evidencia que el referido aseguramiento y presentación ante el Ministerio Público, fue el **veintinueve de octubre de dos mil ocho, aproximadamente a las dieciocho horas**, en virtud de una orden de búsqueda, localización y presentación, girada por el Ministerio Público, con fundamento en los artículos 16 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracciones I y III, 37, 266, del Código de Procedimientos Penales

para el Distrito Federal –caso urgente–; 3, fracciones V y XXI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y 6, fracciones XI y XII, del Reglamento de la Ley Orgánica de esa institución; originada por la denuncia de \*\*\*\*\* por el secuestro de \*\*\*\*\* y fue puesto a disposición del Ministerio Público a las veintitrés horas del día veintinueve de octubre de esa anualidad y retenido a partir de las cuatro horas con diez minutos del treinta de octubre del mismo año, en virtud de una **orden de detención del Ministerio Público por caso urgente**.

Lo anterior, expuso el Tribunal Colegiado de Circuito, se afirmaba así, pues no obstante que tanto del oficio como del informe de puesta a disposición, no se advierte la hora exacta en que fueron asegurados y puestos a disposición los entonces probables responsables, entre los que se encontraba el hoy impetrante, de acuerdo con lo expuesto por la policía remitente \*\*\*\*\*, en su ampliación de declaración ante el juez de la causa, refirió que el aseguramiento del primer investigado se realizó después del mediodía del citado veintinueve de octubre, derivado de la orden de búsqueda, localización y presentación de \*\*\*\*\* y que, al enjuiciado \*\*\*\*\*, lo aseguraron después de las dieciocho horas de ese mismo día<sup>7</sup>; asimismo, el referido quejoso señala en su demanda de amparo que fue puesto a disposición hasta las veintitrés horas de ese mismo día, sin que del oficio respectivo se advierta la citada hora, aunque ese aspecto se corrobora con la constancia ministerial en que se

---

<sup>7</sup> Audiencia de 3 de febrero de 2009. Fojas 4323 y 4324 del tomo V de la causa penal.

asentó formalmente esa hora como la relativa a la puesta a disposición<sup>8</sup>; por ello, no obstante lo anterior, deberán considerarse esos horarios como los legalmente válidos, al no existir prueba en contrario, así como tampoco que por lo que hace al horario de aseguramiento fuera controvertido por el procesado o su defensa en el transcurso del procedimiento.

Y después de relacionar algunas constancias que obran en la causa, el Tribunal Colegiado de Circuito determinó que el aseguramiento y posterior detención del quejoso no obedeció a un caso de flagrancia, sino como consecuencia de la orden de búsqueda, investigación y presentación ordenada por el Ministerio Público, girada al probable responsable \*\*\*\*\* y posteriormente por la orden de detención por caso urgente, ante la confesión realizada por el quejoso.

Lo anterior, porque del informe de puesta a disposición (presentación) suscrito por los policías remitentes el veintinueve de octubre de dos mil ocho, se advierte que al ser asegurado el probable responsable \*\*\*\*\*, refirió que también participó en los secuestros su hermano \*\*\*\*\* y otro sujeto de nombre \*\*\*\*\* y demás personas; al ser asegurado el referido \*\*\*\*\*, expuso que también participó en los secuestros el impetrante \*\*\*\*\*, en la comisión de los ilícitos.

Por lo que concluyó el citado órgano de control constitucional, el aseguramiento y presentación del peticionario de amparo se encuentra justificado, y apegado a leyes previamente

---

<sup>8</sup> Foja 1454 del tomo II de la causa penal.

establecidas (artículos 3 y 266 del Código de Procedimientos Penales, 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y 6 del Reglamento de la citada Ley Orgánica, todas del Distrito Federal),<sup>9</sup> como los exige la Constitución Federal (preceptos 16 y 21) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (numeral 7)<sup>10</sup>; pues cabe recordar que de los oficios de

---

<sup>9</sup> **Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.**

**“Artículo 3.** Corresponde al Ministerio Público:

I. Dirigir a la Policía Judicial en la investigación que ésta haga para comprobar el cuerpo del delito ordenándole la práctica de las diligencias que, a su juicio, estime necesaria para cumplir debidamente con su cometido, o practicando él mismo aquellas diligencias; ...

III. Ordenar, en los casos a que se refiere el artículo 266 de este Código la detención o retención según el caso, y solicitar cuando proceda la orden de aprehensión...”.

**“Artículo 266.** El Ministerio Público y la policía judicial a su mando están obligados a detener al responsable, sin esperar a tener orden judicial, en delito flagrante o en caso urgente”.

**Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.**

**“Artículo 3.** (Investigación de los delitos). Las atribuciones a que se refiere la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, sobre la investigación de los delitos en la averiguación previa y la persecución de los imputados comprenden: ...

V. Ordenar la detención y, en su caso, la retención, de los imputados...

XXI. Utilizar los medios de apremio que marca la legislación respectiva, para lograr la comparecencia de personas que tengan datos que aportar a la investigación de un delito, de manera efectiva, respetando en todo momento los derechos de los gobernados; y...”.

**Reglamento de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.**

**“Artículo 6.-** El Ministerio Público en la investigación de los delitos, llevará a cabo las acciones siguientes: ...

XI. Ordenar la detención de los imputados, tratándose de caso urgente, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

XII. Ordenar la localización y presentación de los imputados, en los supuestos siguientes:

a) Cuando después de habersele girado dos citatorios para comparecer a rendir su declaración y cerciorarse de que fueron entregados en el domicilio de la persona citada no lo hicieron;

b) Cuando de las diligencias practicadas no se logre obtener datos para su citación, y

c) Cuando hubiere comparecido ante el agente del Ministerio Público y se haya reservado su derecho a declarar ofreciendo hacerlo posteriormente en fecha determinada, y no haya comparecido para ello.

En este caso el fiscal de investigación verificará que la presentación del imputado se lleve a cabo en términos de lo que establece la legislación aplicable [...]”

<sup>10</sup> **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.**

siete de agosto y veintisiete de octubre, ambos de dos mil ocho, el Ministerio Público ordenó además de la localización y presentación del citado \*\*\*\*\*, la búsqueda y localización de más probables responsables, por lo que ante el señalamiento que fue realizado por los hermanos \*\*\*\*\*, de que el hoy quejoso participó en los delitos, es que los agentes de la policía judicial procedieron a ir por el impetrante hasta su lugar de trabajo, en donde lo esperaron hasta que fue señalado por sus cómplices; por tanto, en el supuesto caso de que los agentes presentadores no hubieran realizado de esa forma los aseguramientos de los implicados, a fin de presentarlos ante el Ministerio Público, se hubieran sustraído de la acción de la justicia, ante la comunicación que mantenían vía teléfono celular y en el caso de algunos de ellos, por el grado de parentesco; aunado a las distancias y tránsito existentes de un lugar a otro en el Distrito Federal, y a la aceptación de los hechos ante la propia policía donde según el informe, los amenazó con perjudicarlos pues su mamá es funcionaria del Poder Judicial de la Federación, y a que el mismo peticionario de amparo al rendir su declaración ministerial cuando fue presentado ante el agente del Ministerio

---

**“Artículo 16.** Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [...].”

**“Artículo 21.** La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función [...].”

#### **Convención Americana Sobre Derechos Humanos.**

**“Artículo 7.** Derecho a la Libertad Personal.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas [...].”

Público a la una horas con cincuenta y dos minutos también confesó los hechos imputados.

Conclusión la anterior, que no comparte esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se estima que en el caso analizado, se vulneró en forma palmaria el derecho fundamental de la libertad personal del quejoso, en la medida que la restricción original de aquélla pretendió justificarse bajo la actualización de hipótesis de caso urgente, apartándose de la correcta interpretación que debe hacerse del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, acorde con la jerarquía y prevalencia de los derechos fundamentales de las personas, así como su impacto en el ordenamiento jurídico mexicano, es indudable que la emisión de actos de autoridad que afecten la libertad de los individuos deben apoyarse de manera indefectible en las normas de derecho positivo que tornen legal su actuación y a su vez garanticen la seguridad jurídica de los gobernados, para lo cual constitucionalmente se establece que nadie puede ser detenido o privado de su libertad en relación a la investigación delictiva sino en caso de flagrancia o urgencia, lo que evidentemente remite a las enumeradas disposiciones procesales contenidas en la respectiva codificación adjetiva, las que establecen las hipótesis y casos en los cuales el órgano de autoridad se encuentra facultado para privar de la libertad a cualquier persona.

Así, previo ejercicio de la acción de remisión y consignación con detenido, en términos del ordinal 266 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal –que resulta aplicable al caso concreto–, se constituye requisito formal de validez insoslayable que la detención se haya realizado en flagrancia o caso urgente.

En el caso, claramente se inadvirtió que la detención del peticionario del amparo (veintinueve de octubre de dos mil ocho) fue notoriamente infractora de las formalidades que subyacen para la válida detención de las personas relacionadas con la probable comisión de un hecho delictivo bajo las hipótesis normativas de flagrancia o caso urgente, por cuanto a los hechos materia del ejercicio de la acción penal se refiere; ello, toda vez que en la fecha en que fue detenido si bien existía aperturada una averiguación previa relativa a los sucesos por los que finalmente se condenó al amparista, lo cierto es que **no existía mandamiento escrito previo al acto de detención que legalmente lo justificara**, lo cual pasó inadvertido para el juez de primera instancia, quien el uno de noviembre de dos mil ocho ratificó la detención del ahora quejoso al calificarla bajo la hipótesis de caso urgente al razonar que se refiere a un delito grave, con riesgo “fundado” de que el inculpado se sustrajera de la acción de la justicia, por tratarse de delito grave<sup>11</sup>; consideración impropia, puesto que no se surtió dicha hipótesis, prevista en el precepto 268 del código adjetivo de la materia aplicable, en virtud a la cual cabe la válida posibilidad de privar provisionalmente de la libertad a una persona que probablemente

---

<sup>11</sup> Fojas 1940 a 1947, del tomo II de la causa penal.



intervino en algún evento con connotación delictiva y que de no proceder a su detención, se sustraiga a la acción de la justicia, para lo cual taxativamente se prevén requerimientos formales e insoslayables que permitan su detención, precisamente que **ésta se ordene por escrito en el que se funde y exprese los indicios en que se apoye**, el ilícito atribuido sea de los señalados como graves por la ley, exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse de la acción de la justicia y por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia no pueda ocurrir ante la autoridad judicial para solicitar la orden de aprehensión.

Requerimientos de carácter formal que en el caso no se justificaron y pese a ello se ratificó como válida la detención del justiciable, en clara vulneración a su derecho humano con entera independencia a su eventual relación con un evento presuntamente delictivo, no ser privado de su libertad de manera arbitraria.

En efecto, el proceder de la policía ministerial resulta ilegal, **no en cuanto a la detención del primer inculcado cuya orden de detención se cumplimentó y la detección del teléfono celular que poseía y que estaba vinculado con los datos que arrojó la indagatoria**, sino porque a partir de su logro, se obtuvieron datos en forma ilícita, como fue la recepción de la confesión del detenido, ya que esa autoridad no está facultada para recibir declaraciones de esa naturaleza, además, actuaron en contravención a la normatividad que rige su actuar, pues lejos

de informar inmediatamente a la autoridad ministerial sobre el resultado de esa instrucción, procedieron de mutuo a realizar diversas diligencias sin la conducción y mando del órgano persecutor de delitos, como tampoco justificaron la premura de la detención de las cuatro últimas personas aseguradas contra las que no existía orden de detención, pues entre el aseguramiento del primero y el último de los inculpados **medió un periodo de seis horas**, plazo en el que los policías ministeriales estuvieron obligados a acudir ante el Ministerio Público para que éste procediera conforme a sus atribuciones constitucionales y emitiera las órdenes respectivas contra las personas que resultaran involucradas con los hechos, pero **no recabaron esa orden contra el aquí quejoso**, por lo tanto, su detención y la de sus coinculpados –con excepción del primero de los asegurados–, fue arbitraria y, en consecuencia, inconstitucional, al producir afectación a su libertad personal, así como a los principios de legalidad y debido proceso legal en perjuicio del revisionista.

Por lo que el Tribunal Colegiado del conocimiento deberá considerar que **la detención del quejoso resulta ilegal**.

Sin que en el caso, sea dable establecer que, como lo argumentó el Tribunal Colegiado de Circuito, la detención determinada por el Ministerio Público en caso urgente y su ratificación se deba considerar como consumada y por ende, inimpugnables en el juicio de amparo directo, pues si bien, resultaría improcedente el juicio de amparo en contra del acuerdo de ratificación de la detención como acto destacado, ello no implica que dichas actuaciones puedan quedar exentas de control

constitucional, por el contrario, si se toma en consideración que la protección del derecho humano al debido proceso lo conforman sistemáticamente diversos numerales constitucionales, es que, el respeto a este derecho se vincula con la observación de los parámetros que la Constitución establece para todas las etapas procedimentales, por lo que las transgresiones que aduzca el sentenciado en torno a su detención son susceptibles válidamente de estudiarse en amparo, pues sólo tendrán por efecto verificar si las pruebas que apoyan la sentencia de condena fueron obtenidas de forma lícita o ilícita.

Tal criterio se puede apreciar en la jurisprudencia por reiteración de tesis 138/2011, consultable en la página 2056, Libro III, Tomo 3, Diciembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

**“AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO.** Para determinar si la categoría de ‘violaciones procesales’ contenida en el artículo 160 de la Ley de Amparo es aplicable a las cometidas durante la averiguación previa, es necesario interpretar tal disposición a la luz de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993 y el 3 de julio de 1996; de las que se colige que la intención del Poder Reformador de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos fue que dentro de la indicada categoría se comprendieran las violaciones cometidas durante la fase de averiguación previa. Ello es así, toda vez que dicho órgano hizo alusión a un concepto amplio de juicio de orden penal para efectos de las garantías contenidas en el artículo 20 constitucional, señalando que éste prevé tanto la fase jurisdiccional (ante el juez) como la previa (ante el Ministerio Público). Por lo anterior, algunas de las garantías antes reservadas para la etapa jurisdiccional ahora deben observarse en la averiguación previa, criterio que se refuerza si se toma en cuenta que el indicado artículo 160 tiene como finalidad reparar, en el amparo directo, la violación a las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 20 constitucionales, pues todo el listado de violaciones se traduce en la vulneración de aquéllas. Además, no debe pasarse por alto la intención garantista del legislador federal, al establecer como violaciones procesales en la fracción XVII del citado artículo 160, los casos análogos precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los tribunales colegiados de circuito, supuesto en el que pueden ubicarse las violaciones a las garantías individuales observables en la averiguación previa, consistentes en la obtención de pruebas ilícitas, la negativa para facilitar al inculpado los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso, así como la transgresión a la garantía de defensa adecuada, violaciones que no ameritarían la reposición del procedimiento, sino la invalidez de la declaración obtenida en su perjuicio o la de la prueba recabada ilegalmente, en

tanto que su estudio necesariamente implicaría la interpretación directa de preceptos constitucionales."

Asimismo, tiene aplicación al caso concreto, la jurisprudencia 1a./J. 45/2013 (10ª), de rubro: ***“VIOLACIONES COMETIDAS EN LA DETENCIÓN DEL INculpADO CON MOTIVO DE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16, CONSTITUCIONAL (FLAGRANCIA O CASO URGENTE), ES FACTIBLE SU ANÁLISIS EN AMPARO DIRECTO CUANDO NO HAYAN SIDO ANALIZADAS PREVIAMENTE EN AMPARO INDIRECTO.”***, cuyo criterio, en el marco de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de diez de junio de dos mil once, adquiere relevancia significativa, por la fuerza normativa de la Constitución y el carácter inviolable de los derechos humanos, pues ante las expectativas del respeto a la dignidad humana en todos sus derechos materializados en un proceso penal, todas las cuestiones concernientes al tema de la libertad de la parte inculpada es menester de analizarse y calificar su constitucionalidad, precisamente por vincularse y derivar de ese derecho fundamental inmerso en los instrumentos de carácter internacional de los que México es parte; de tal manera que los Tribunales de la Federación, vinculados directamente a adecuar sus fallos de conformidad con las normas constitucionales y en irrestricto apego a los derechos fundamentales, se constituyen en puente entre la Constitución y los particulares al momento en que resuelven un caso concreto, ya que se tendrá que dilucidar si el derecho aplicable, en ese asunto, es compatible con lo dispuesto

en la Carta Magna y, en caso de no ser así, introducir el contenido del derecho fundamental.

## **II. Demora injustificada en la puesta a disposición del inculpado ante el Ministerio Público investigador.**

Esta Primera Sala advierte que las razones expuestas por el Tribunal Colegiado de Circuito, para considerar que fue justificada la dilación en la puesta a disposición ante el Ministerio Público, **no son acordes a los lineamientos establecidos** por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución emitida en el **amparo directo en revisión \*\*\*\*\***.

En efecto, en la sentencia recurrida el Tribunal Colegiado de Circuito consideró que no existió demora injustificada a partir de que fue asegurado el quejoso y hasta que fue presentado a disposición del Ministerio Público, pues argumentó, que del informe de puesta a disposición y de la ampliación de declaración de la policía remitente \*\*\*\*\*, se advierte que alrededor del mediodía del veintinueve de octubre de dos mil ocho se logró el aseguramiento del probable responsable \*\*\*\*\*, en la calle \*\*\*\*\*, del pueblo de \*\*\*\*\*, delegación \*\*\*\*\*, y culminaron después de las dieciocho horas, al ser asegurado el aquí quejoso \*\*\*\*\* en la avenida \*\*\*\*\*, esquina con \*\*\*\*\*, colonia \*\*\*\*\*, delegación \*\*\*\*\*, para después trasladarse a la casa de seguridad ubicada en calle \*\*\*\*\*, lote \*\*\*\*\*, manzana \*\*\*\*\*, colonia \*\*\*\*\*, delegación \*\*\*\*\* y, finalmente, ser presentados a disposición del Ministerio Público quien al confesar el delito, debía resolver la

situación jurídica de los investigados en sus oficinas, sito en calle \*\*\*\*\* , esquina con \*\*\*\*\* , colonia \*\*\*\*\* , delegación \*\*\*\*\* .

De lo anterior, concluyó el Tribunal Colegiado de Circuito, que tampoco existe algún perjuicio contra las prerrogativas del quejoso, ya que si bien es cierto que respecto del impetrante \*\*\*\*\* , fue asegurado después de las **dieciocho horas** del veintinueve de octubre de dos mil ocho y puesto a disposición del Ministerio Público **cinco horas después**, como él mismo lo refiere que se le presentó hasta las veintitrés horas de ese mismo día, debe estimarse que por la mecánica de los hechos existió un impedimento razonable en la demora, por el que fue retenido por más tiempo del estrictamente necesario para ser trasladado ante la representación social, ya que después de su aseguramiento, en la avenida \*\*\*\*\* , esquina con \*\*\*\*\* , colonia \*\*\*\*\* , delegación \*\*\*\*\* , todavía se tuvieron que trasladar a la casa de seguridad ubicada en calle \*\*\*\*\* , lote \*\*\*\*\* , manzana \*\*\*\*\* , colonia \*\*\*\*\* , delegación \*\*\*\*\* , Distrito Federal, a seguir con la investigación, lugar en que los agentes aprehensores realizaron una búsqueda encubierta con el fin de obtener mayores datos posibles.

Actuación que fue legal, ya que el ubicar la casa de seguridad también fue una orden del representante social en sus oficios de siete de agosto y diecisiete de octubre de dos mil ocho y, posterior a ello, fue puesto a disposición del órgano investigador en calle \*\*\*\*\* , esquina con \*\*\*\*\* ,

colonia \*\*\*\*\*, delegación \*\*\*\*\*, lugar distante de la casa de seguridad, en la hora en que refiere el impetrante; datos todos ellos que revelan que no fue puesto a disposición de forma inmediata precisamente ante el impedimento razonable como el de la distancia del lugar de su detención en la delegación \*\*\*\*\*, su posterior traslado a la casa de seguridad ubicada en las inmediaciones del \*\*\*\*\*, en la delegación \*\*\*\*\*, para finalizar en la colonia \*\*\*\*\*, de la delegación \*\*\*\*\*.

Por lo que, dadas las circunstancias de los aseguramientos de todos los implicados (\*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* y \*\*\*\*\*, de apellidos \*\*\*\*\*, así como de \*\*\*\*\*) y las distancias y tránsito existente en la Ciudad de México, Distrito Federal, no existió demora injustificada en la puesta a disposición ante el Ministerio Público, ni perjuicio en las prerrogativas del quejoso \*\*\*\*\*, al no ponerlo a disposición del Ministerio Público en forma inmediata, por las circunstancias que se presentaron.

Consideraciones que a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no acataron por parte del Tribunal Colegiado de Circuito las directrices establecidas por este Alto Tribunal, en cuanto a que en atención al régimen general de protección contra detenciones que proclama nuestra Constitución se deriva una obligación de inmediata puesta a disposición, el cual exige que la persona detenida sea presentada ante el Ministerio Público lo antes posible. Dicho de otro modo, la persona debe ser puesta a disposición de la autoridad ministerial o judicial respectiva, sin dilaciones injustificadas.



Estableciendo que se actualiza una demora injustificada siempre que, no existiendo motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona continúe a disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea competente para definir su situación jurídica.

Puntualizando que tales motivos razonables únicamente pueden tener origen en impedimentos fácticos reales y comprobables (como la distancia que existe entre el lugar de la detención y el lugar de la puesta a disposición), los cuales además, deben ser compatibles con las facultades estrictamente concedidas a las autoridades. Es decir, en cuanto sea posible, es necesario llevar a la persona detenida por flagrancia o caso urgente ante el Ministerio Público, a menos que exista un impedimento razonable que no resulte contrario al margen de facultades constitucionales y legales a cargo de la policía.

**Lo que en el caso se estima no aconteció**, porque ciertamente el quejoso sufrió una detención prolongada indebidamente por **cinco horas**, pues fue asegurado aproximadamente a las dieciocho horas, del veintinueve de octubre de dos mil ocho, en la avenida \*\*\*\*\*, esquina con \*\*\*\*\*, colonia \*\*\*\*\*, delegación \*\*\*\*\*, del parte informativo se obtiene –como también lo destacó el Tribunal Colegiado de Circuito cuya sentencia se revisa–, que los elementos captores, después de su detención se trasladaron a la casa de seguridad ubicada en calle \*\*\*\*\*, lote \*\*\*\*\*, manzana \*\*\*\*\*, colonia \*\*\*\*\*, delegación \*\*\*\*\*, a

**seguir con la investigación**, pues de acuerdo al dicho de los agentes aprehensores en ese lugar realizaron una búsqueda encubierta con el fin de obtener mayores datos posibles, **lo que en modo alguno puede constituir el impedimento razonable a que alude este Alto Tribunal, que justificara la demora en la puesta a disposición.**

Lo anterior, porque como lo ha sustentado esta Primera Sala, no forman parte de los motivos razonables que justifiquen la demora en la puesta a disposición, únicamente pueden tener como origen impedimentos fácticos reales, comprobables y lícitos, que sean compatibles con las facultades estrictamente concedidas a las autoridades, lo que implica que los agentes de policía no pueden retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público, a fin de ponerlo a disposición, donde deben desarrollarse las diligencias de investigación pertinentes e inmediatas, que permitan definir su situación jurídica –de la cual depende su restricción temporal de la libertad personal–, de tal manera que la policía no puede simplemente **retener a un individuo con la finalidad de obtener su confesión o información relacionada con la investigación que realiza, para inculparlo a él o a otras personas.**<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Así lo determinó esta Primera Sala al resolver los amparos directos en revisión 517/2011 y 3229/2012, en sesiones de 23 de enero y 4 de diciembre de dos mil trece, que dieron lugar a las tesis 1a. CLXXV/2013 y 1a. LIII/2014, Décima Época, registros: 2003545 y 2005527, de títulos: **“DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO A DISPOSICIÓN INMEDIATA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. ELEMENTOS QUE DEBEN SER TOMADOS EN CUENTA POR EL JUZGADOR A FIN DE DETERMINAR UNA DILACIÓN INDEBIDA EN LA PUESTA A DISPOSICIÓN.”** y **“DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO DE SER PUESTO SIN DEMORA A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO, ALCANCES Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS GENERADAS POR LA VULNERACIÓN DE TAL DERECHO.”**

Por tanto, el mandato de poner a disposición en forma inmediata a una persona detenida es la mayor garantía de los individuos en contra de aquellas acciones de la policía que se encuentran fuera de los cauces legales y que están destinadas a presionar o a influir en el detenido, en un contexto que le resulta totalmente adverso.

Así, del examen estricto de las circunstancias que acompañan al caso, este Alto Tribunal considera que el ahora quejoso fue retenido por los elementos captores por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarlo ante el Agente del Ministerio Público, en violación de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales antes citados y sus derechos humanos del debido proceso y libertad personal que se encuentran inmersos en los artículos 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Esa situación revela la presunción fundada de que el detenido estuvo incomunicado y que en ese período sufrió afectación psíquica por el estado de incertidumbre en cuanto a su seguridad jurídica y personal, dada la retención prolongada a la que estuvo sometido, lo que trasciende al estado psico-anímico en el que rindió su declaración ministerial y, por ende, **su confesión ministerial respecto de los hechos que se le imputan carecerá de validez**, no por el contenido de la misma, sino por las circunstancias en que fue emitida.

De acuerdo a lo hasta aquí expuesto es evidente que derivado de la ilegal detención, así como la indebida retención policíaca del quejoso con el propósito de continuar investigando, **el Ministerio Público recabó pruebas consideradas como ilícitas** por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en debido acatamiento a los derechos de debido proceso y defensa adecuada.

Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 139/2011, emitida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 2057, tomo 3, diciembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

**“PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.** Exigir la nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al inculpado durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales alegando como fundamento: (i) el artículo 14 constitucional, al establecer como condición de validez de una sentencia penal, el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, (ii) el derecho de que los jueces se conduzcan con imparcialidad, en términos del artículo 17 constitucional y (iii) el derecho a una defensa adecuada que asiste a todo inculpado de acuerdo con el artículo 20,

fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, si se pretende el respeto al derecho de ser juzgado por tribunales imparciales y el derecho a una defensa adecuada, es claro que una prueba cuya obtención ha sido irregular (ya sea por contravenir el orden constitucional o el legal), no puede sino ser considerada inválida. De otra forma, es claro que el inculpado estaría en condición de desventaja para hacer valer su defensa. Por ello, la regla de exclusión de la prueba ilícita se encuentra implícitamente prevista en nuestro orden constitucional. Asimismo, el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales establece, a contrario sensu, que ninguna prueba que vaya contra el derecho debe ser admitida. Esto deriva de la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables”.

Luego, si en términos del artículo 21 constitucional se establece que las investigaciones de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél, en el ejercicio de esta función; esto significa que, cuando las autoridades policiacas incumplen con ese requisito constitucional, al actuar sin la conducción y bajo el mando del Ministerio Público, de motu proprio, so pretexto de una búsqueda de la verdad o la debida integración del material probatorio, generan la producción e introducción al proceso penal de elementos de prueba que no cumplen con los requisitos de

formalidad constitucional, es evidente que todas esas pruebas serán nulas.

Lo anterior es así, ya que las autoridades que detengan al indiciado deben ponerlo inmediatamente y sin demora a disposición del Ministerio Público, a fin de respetar y cumplir ese derecho fundamental contenido en la norma constitucional referida, pues lo contrario implicaría que la violación al mismo no tuviera ninguna razón de ser, siendo que lo que está en juego es la libertad personal del detenido que constituye un derecho humano que no puede ser restringido, salvo en las condiciones que la propia Constitución establece.

Asimismo, es necesario precisar que no pasa inadvertido para esta Primera Sala, la responsabilidad penal y administrativa que pudiera ser imputable a las autoridades policiacas aprehensoras, al provocar una detención sin justificación y la demora injustificada de un detenido<sup>13</sup>. La cual podrá realizarse en la vía legal respectiva.

Derivado del anterior análisis, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que lo procedente es revocar la sentencia recurrida y devolver los autos al Tribunal Colegiado para que determine, por una parte, **que la**

---

<sup>13</sup> Esta consideración de reproche y exigencia de responsabilidad jurídica hacia los servidores públicos que intervienen en la detención de una persona, por hechos considerados como delitos en la ley penal, ya ha sido establecida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se advierte en la ejecutoria que correspondió a la resolución del amparo directo 14/2011, aprobado en sesión de 9 de noviembre de 2011, respecto a la responsabilidad que deriva por efectuar una detención fuera de las hipótesis de flagrancia o caso urgente, establecidos en la Constitución Federal como supuestos de justificación constitucional para la restricción de la libertad personal de los gobernados.

**detención del quejoso fue ilegal y, por otra, que existió una demora injustificada en la puesta a disposición del quejoso ante el Ministerio Público por parte de los policías aprehensores.**

Ahora bien, como consecuencia de las anteriores trasgresiones el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento **deberá excluir del caudal probatorio exclusivamente las pruebas relacionadas directamente con la detención del revisionista**, que lo son: **a)** la declaración ministerial del revisionista [confesión de \*\*\*\*\*] como de su coinculpado [\*\*\*\*\*] *–estas pruebas también se relacionan con la vulneración al derecho a ser puesto a disposición de forma inmediata de la autoridad ministerial por los elementos captores–*, **b)** la localización del teléfono celular que el quejoso traía consigo, **c)** la inspección de ese aparato de comunicación, **d)** el dictamen que derivó de ese teléfono, **e)** los reconocimientos ministeriales que contra el quejoso efectuaron una de las víctimas [\*\*\*\*\*] y dos testigos [\*\*\*\*\* y \*\*\*\*\*], y **f)** así como el informe de puesta a disposición, únicamente en torno al quejoso, pero deben considerarse válidas las restantes probanzas.

Lo anterior es así, porque las pruebas derivadas (aunque lícitas en sí mismas) deben ser anuladas cuando aquellas de las que son fruto resultan inconstitucionales, aunque es necesario apuntar que la prueba sólo será eficaz en caso de que objetivamente pueda advertirse que el hecho en cuestión hubiera tenido que ser descubierto por otros medios lícitos, totalmente

independientes al medio ilícito y puestos en marcha en el curso del proceso.

Por ello, **no deberán formar parte de ese efecto de nulidad** las pruebas recabadas en la indagatoria **respecto del primer detenido** (\*\*\*\*\* que abarcan la detección del teléfono celular que poseía, inspección del mismo, dictamen pericial de ese teléfono) porque contra éste existía orden de detención emitida por el Ministerio Público, ni en general, **las pruebas recabadas durante la instrucción** (declaraciones de las víctimas, testigos, policías, peritajes, documentos, informes, careos, etcétera), por ser obtenidas a través de una fuente independiente, esto es, durante la instrucción en presencia del juez, que fueron sometidas al contradictorio de las partes y en función del respeto a los derechos fundamentales de las víctimas en el proceso penal, aun cuando en esas declaraciones judiciales se ratifiquen las versiones ministeriales, debido a que, por un lado, no pueden ser convalidadas por ese medio las pruebas viciadas y, por otro, tendrán valor esas declaraciones judiciales pero exclusivamente en cuanto a los datos de convicción que por sí mismas arrojen en esa etapa procesal.

Esto implica que los diversos testimonios desahogados durante el proceso penal deben dividirse, descartando los aspectos que deriven y se relacionen directamente con las pruebas ilícitas, pero adquiriendo valor en torno a los aspectos que por medio de esa fuente independiente y legal son obtenidos, máxime que la nulidad que alcanzó a algunas de las pruebas desahogadas en la averiguación previa no se relaciona con la



credibilidad del dicho de los diversos testigos, sino de una actuación indebida de la autoridad policíaca.

Esta metodología sobre la división de la valoración de un testimonio ha sido adoptada por esta Suprema Corte de Justicia en la Nación en varios de sus precedentes<sup>14</sup>, así como en la jurisprudencia 1a./J. 81/2006, que señala:

**“PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCESO PENAL CUANDO LOS HECHOS SE CONOCEN POR REFERENCIA DE TERCEROS. SU VALORACIÓN.**

El artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que para apreciar la prueba testimonial, el juzgador debe considerar que el testigo: a) tenga el criterio necesario para juzgar el acto; b) tenga completa imparcialidad; c) atestigüe respecto a un hecho susceptible de conocerse por medio de los sentidos, y que lo conozca por sí mismo y no por inducciones o referencias de otro sujeto; d) efectúe la declaración de forma clara y precisa, sin dudas ni reticencias sobre la sustancia del hecho ni sobre las circunstancias esenciales; y, e) no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno. En congruencia con lo anterior, se concluye que cuando en una declaración testimonial se aportan datos relevantes para el proceso penal, unos que son conocidos directa o sensorialmente por el deponente y

---

<sup>14</sup> Como es el caso de los amparos directos 8/2008, 9/2008, 10/2008 y 16/2008, entre otros, aprobados en sesión de 12 de agosto de 2009, por esta Primera Sala.

otros por referencia de terceros –y que, en consecuencia, no le constan–, el relato de los primeros, en caso de cumplir con los demás requisitos legalmente establecidos, tendrá valor indiciario, y podrá constituir prueba plena derivado de la valoración del juzgador, cuando se encuentren reforzados con otros medios de convicción, mientras que la declaración de los segundos carecerá de eficacia probatoria, por no satisfacer el requisito referente al conocimiento directo que prevé el citado numeral.”<sup>15</sup>

Cuyo contenido adquiere aplicación también tratándose de pruebas ilícitas que no derivan de los testimonios que se han desahogado, sino, como en el caso, de una indebida actuación de la autoridad policíaca.

Cabe agregar que en este asunto, no existieron pruebas recabadas por la autoridad ministerial durante el tiempo de prolongación indebida de la libertad del quejoso por parte de los policías, por lo que no es necesario discernir en torno a alguna que con el carácter de viciada derivó en forma directa o causal de la referida detención prolongada ilegal que deba ser excluida por incumplir con los requisitos de formalidad constitucional, de manera tal que se hubiese realizado en condiciones que no permitieran al inculpado ejercer su derecho de defensa adecuada.

Por lo tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que **fue ilegal la detención** que

---

<sup>15</sup> Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, Enero de 2007, Página: 356.

efectuaron los elementos aprehensores al revisionista \*\*\*\*\*, así como que **se violentó su derecho a ser puesto a disposición del Ministerio Público de forma inmediata**, por lo que en acatamiento a esta resolución, deberán devolverse los autos al Tribunal Colegiado del conocimiento para que haga esos pronunciamientos y considere nulas las diligencias relacionadas con la detención del inculpado, así como la demora de su puesta a disposición ante el órgano investigador, relativas a la declaración ministerial del inculpado (confesión), como de su coincepado \*\*\*\*\*, la localización del teléfono celular que traía consigo, así como su inspección, el dictamen que derivó de ese teléfono celular, los reconocimientos ministeriales que contra el quejoso efectuaron una de las víctimas y dos testigos, también el informe de puesta a disposición, únicamente en torno al quejoso, pero no deberán formar parte de ese efecto de nulidad las pruebas recabadas en la indagatoria respecto del primer detenido (\*\*\*\*\*) porque contra éste existía orden de detención, ni las recabadas en general durante la instrucción por ser obtenidas a través de una fuente independiente, aun cuando en esas declaraciones judiciales se ratifiquen las versiones ministeriales, pues se deberán analizar divididamente, otorgando valor exclusivamente los datos que esos elementos de convicción arrojen por sí mismos en esa etapa procesal, atendiendo a los lineamientos establecidos en esta ejecutoria.

En esa línea de consideraciones, se destaca que el alcance de la protección constitucional otorgada en los términos indicados no prejuzga sobre la eficacia demostrativa del restante material

probatorio, por lo que con aquéllas que subsistan habrá de emitirse un nuevo pronunciamiento.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

**PRIMERO.** En la materia de la revisión se revoca la sentencia recurrida.

**SEGUNDO.** Devuélvanse los autos relativos al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de este veredicto constitucional.

**Notifíquese;** con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al Tribunal Colegiado de origen y, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.

Así, lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. En contra de los emitidos por los Ministros José Ramón Cossío Díaz y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes se reservan el derecho de formular voto particular.

Firman el Ministro Presidente de la Primera Sala y el Ministro Ponente, con el Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

**PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA**

---

**MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO**

**PONENTE**

---

**MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA**

**SECRETARIO DE ACUERDOS  
DE LA PRIMERA SALA**

---

**LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES**

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

SAPL